

España avala más impuestos europeos para evitar recortes en la UE

FIRMA UN DOCUMENTO CON OTROS 16 ESTADOS MIEMBROS/ Los llamados Amigos de la Cohesión buscan vías para que la Comisión pueda abordar las nuevas prioridades sin abandonar la agricultura y la Cohesión.

Andrés Stumpf. Bruselas

Más impuestos de carácter europeo para financiar las nuevas prioridades estratégicas del bloque comunitario sin recortar las partidas más tradicionales. Esa es la posición que avala España de cara a las negociaciones sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual, los nuevos presupuestos europeos para el periodo comprendido entre 2028 y 2034. El Ministerio de Exteriores de España ha firmado un documento junto con otros 16 países de la UE en el que señalan que están “abiertos a debatir propuestas de nuevos recursos propios que alivien de manera efectiva la presión sobre los presupuestos de los estados miembros”. Estos países aseguran que “estos debates deben vincularse a las negociaciones generales sobre el MFF”.

El objetivo de los nuevos impuestos pasaría por recaudar más recursos para que la Unión Europea pudiera afrontar la necesidad de redoblar su inversión en Defensa y en mejoras de competitividad sin tener para ello que recortar otras partidas consideradas también vitales. La propuesta de la Comisión Europea, presentada a mediados del pasado ejercicio, contempla recortes en la financiación de proyectos de cohesión, en agricultura y en pesca para ajustar las cuentas.

Los firmantes de este docu-

mento son el grupo conocido como Amigos de la Cohesión, un bloque que, junto a España, forman Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. Los diecisiete apuestan por un marco financiero que vaya más allá de los dos billones de euros propuestos por la Comisión Europea y que, a precios actuales y teniendo en cuenta la necesidad de afrontar los primeros pagos de la deuda NextGenerationEU, supone un nivel de recursos muy similar al del presupuesto actual (2020-2027).

La institución presidida por Ursula von der Leyen ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de buscar vías para incrementar sus ingresos. La Comisión Europea ha planteado crear una contribución anual para grandes empresas que operan en el mercado único europeo con un volumen de negocio neto superior a 100 millones de euros. Además, plantea establecer un impuesto aplicado a los Estados miembros por cada tonelada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no recogidos.

Estas propuestas se complementarían con el sistema de ingresos por derechos de carbono (ETS) que se quiere ampliar a más sectores como la construcción y el arancel al



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

carbono para las importaciones de productos de la UE e impuestos especiales al tabaco. Las dos primeras medidas ya están en funcionamiento, pero el dinero recaudado va a parar a las arcas nacionales en lugar de a la cesta de ingresos propios de la UE.

De acuerdo con las estimaciones oficiales de la Comisión Europea, estas medidas permitirían recaudar aproximadamente 58.500 millones de euros al año mediante el paquete completo de nuevos recursos propios. En el con-

junto de los siete años de vigencia del marco presupuestario, esto supondría una inyección adicional de recursos de más de 400.000 millones de euros.

“Cualquier nuevo recurso propio debe ser genuino, justo, sencillo y no regresivo”, se limitan a señalar públicamente España y el resto de Estados miembros que secundan el comunicado publicado ayer. Individualmente, muchos países también reclaman que los nuevos impuestos sean genuinamente euro-

peos y no una transferencia de recursos nacionales al bloque a través de convertir en comunitaria la recaudación nacional.

Unanimidad

Como el propio MFF, la creación de nuevas vías de recursos propios a través de impuestos requiere unanimidad entre los veintisiete Estados miembros de la UE, algo que hace muy difícil que salgan adelante estas propuestas. En el pasado ya se han hecho numerosos intentos que o bien

La creación de nuevos impuestos europeos requiere el voto unánime de los países de la UE

han descarrilado o han acabado en versiones tremendamente descafeinadas en ambición en relación a la propuesta inicial de la Comisión.

Los nuevos impuestos, además, se consideran un prerrequisito por parte del Ejecutivo comunitario para alcanzar su marco de dos billones de dólares.

Otra opción

Otra alternativa que España y el resto de Amigos de la Cohesión pasa por una gestión más flexible de los vencimientos de la deuda.

“Un esquema más gradual de reembolso de Next Generation EU y nueva deuda conjunta para el apoyo a préstamos (como Catalyst Europe) deben considerarse opciones viables para financiar inversiones y bienes públicos europeos esenciales para la autonomía estratégica a largo plazo, garantizando que el MFP pueda abordar eficazmente los retos y prioridades cambiantes de la Unión”, respalda el comunicado.

La propuesta de los Amigos de la Cohesión choca directamente con la que defienden los llamados países frugales como Alemania y Países Bajos. Estos Estados miembros critican por excesivo el MFF presentado por la Comisión Europea y tampoco quieren ver ni en pintura esos nuevos impuestos lanzados desde Bruselas. A juicio de esta facción de la Unión Europea, la Comisión debe recortar en partidas históricas como la agricultura para dejar espacio a las nuevas necesidades.

Londres pide priorizar a las empresas locales en construcción de barcos, acero, IA y energía

A. Zanón. Londres

Comprar británico. Reino Unido se suma a la tendencia de los poderes públicos de priorizar adquisiciones de proveedores locales, y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, ha enviado una carta a sus colegas de gabinete para que adjudiquen menos contratos a compañías del exterior y más a las locales, sobre todo en cuatro ámbitos críticos para la seguridad nacional: construcción de barcos, fabricación de acero, energía e inteligencia artificial (IA).

La reacción de Reino Unido es similar a la de la UE, que desde a principios de año impulsó un plan de competitividad que pasa por fijar una “preferencia europea” en la contratación pública, entre otros aspectos, para plantar cara a EEUU y China.

La carta enviada por Reeves a sus colegas constata la sorpresa por que esa preferencia no fuera ya una realidad y les informa de que a partir de ahora el Tesoro piensa controlar los contratos más importantes y de que, se

ser necesario, se podrían anular decisiones de los propios ministerios.

“Es decepcionante que todavía en muchos contratos esto [priorizar las empresas locales] no suceda. Hemos dado instrucciones para que asegurarnos de que los departamentos actúan en el interés nacional general y no solo se centran en prioridades operativas estrechas”, añade la carta, avanzada por *The Guardian*.

“Por primera vez”, los cuatro segmentos citados “serán

reconocidos como críticos para la seguridad nacional”, explicó un portavoz del Gobierno de Keir Starmer.

Riesgo para la seguridad

Desde 2023, una ley permite prohibir que ciertas empresas pujen en contratos si se las considera un riesgo para la seguridad nacional. “Elaboraremos una guía para priorizar los contratos para los negocios británicos donde sea necesario para proteger la seguridad nacional”, añadieron las mismas fuentes.

Mientras Reino Unido calibra el impacto de la guerra de Irán, el actual primer ministro sigue en la cuerda y el debate sobre la identidad nacional se mantiene en la agenda, el Gobierno busca al menos frenar la sensación de que muchos contratos son adjudicados a grupos exteriores, con la implicación que ello tiene sobre el empleo.

Existen antecedentes de ciertas compañías a las que no se las ve con buenos ojos, como sucedió con el reciente bloqueo de la china Ming

El Gobierno quiere que los contratos públicos en áreas críticas se ejecuten dentro del país

Yang para construir las turbinas del principal parque eólico marino de Reino Unido, en el Mar del Norte. Ello planteó quejas de los sindicatos al entender que se pierden oportunidades en Reino Unido.

En acero, Londres tiene previsto dotarse de capacidad para nacionalizar British Steel tras fracasar las negociaciones con el actual dueño, Jingye, también chino. Downing Street ha lanzado un programa de renovación militar que debería ser desarrollado internamente.